

Una dictadura sin dictadores. Repensando el PRN (1976-83) a partir del libro de A. Bonvecchi y E. Simison,

*¿Cómo gobernó la dictadura? (Buenos Aires: Edhasa, 2026)*¹

A Dictatorship Without Dictators: Rethinking the PRN (1976-83)

Based on the book by A. Bonvecchi and E. Simison,

How Did the Dictatorship Govern?

MARCOS NOVARO

Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina

marcosnovaro@gmail.com



Declaración de interés

Nada que declarar.

<https://doi.org/10.46468/rsaap.20.1.n1>

Resumen: Estas notas analizan el libro de Alejandro Bonvecchi y Emilia Simison (2026) sobre las instituciones que el Proceso de Reorganización Nacional se dio para gobernar. El trabajo ofrece un novedoso y detallado análisis de las funciones que cumplió la Comisión de Asesoramiento Legislativo para resolver disidencias entre las facciones de ese régimen y dar cabida al *lobby* empresario. Contra lo que se ha tendido a pensar, el texto echa luz sobre la consistencia con que los militares se atuvieron a esas reglas. Aquí se discute, sin embargo, cómo analiza las facciones en competencia y se intenta mostrar que la tesis sobre la centralidad de las reglas de división del poder en el PRN lejos de debilitarse, se fortalece si se considera más detenidamente la profundidad de la crisis interna de esas Fuerzas Armadas.

Palabras clave: Dictadura — Instituciones de gobierno — Reformas Económicas

Abstract: These notes refer to the book published by Bonvecchi and Simison (2026) about the institutions that the PRN established to govern. The work offers a novel and detailed analysis of the functions carried out by the CAL to resolve disagreements among the competing factions within that regime and to accommodate business lobbying. And sheds light on the consistency with which the military adhered to those rules. This commentary, however, calls into question the way in which the competing factions are analyzed there, and seeks to show that the thesis on the centrality of the rules of division and control of power with which the PRN operated, far from weakening, is strengthened if one more carefully considers the depth of the internal crisis of those Armed Forces.

Keywords: Dictatorship — Institutions — Economic Reforms

¹ Nota de investigación recibida el 26 de marzo de 2026 y aceptada para su publicación el 10 de abril de 2026.

1. Introducción

Se han cumplido 50 años, medio siglo, del último golpe de Estado en Argentina. Ese aniversario ya de por sí ofrecía una oportunidad inmejorable para un libro como el de Alejandro Bonvecchi y Emilia Simison (2026), que revisa todo lo que se sabe sobre cómo gobernó la dictadura, por qué fracasó en casi todo lo que se propuso y qué responsabilidad le cabe en ese resultado a sus ideas y objetivos, a las diferencias que los militares tuvieron al respecto y a las reglas que se dieron para dirimir las y gobernar. Y, por sobre todo, ofrece nueva y muy valiosa información y un preciso y productivo análisis sobre aspectos hasta aquí poco conocidos y muy importantes de esos asuntos, fundamentalmente a partir del estudio de los archivos de la Junta Militar, el órgano supremo del régimen, y de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, su órgano legislativo.

Pero además este libro es también oportuno porque se cumple aproximadamente un cuarto de siglo de predominio casi absoluto, en no pocos ámbitos académicos, culturales y educacionales, de un enfoque sobre esa etapa del pasado que obturó la discusión razonada de esos temas al abrazar verdades selladas de muy cuestionable sustento científico: que los militares del Proceso fueron un mero instrumento en manos del imperialismo norteamericano y de la clase dominante local; que los desaparecidos fueron 30.000 y lo fueron por la necesidad del régimen de sostener un programa económico que éste abrazó como su razón de ser y que buscaba destruir la industria y quebrar al Estado; que el consenso social se lo proporcionaron los grandes empresarios, la Iglesia Católica y otros actores “de derecha” y minoritarios, no otros sectores más amplios y heterogéneos; que la represión ilegal tuvo un desarrollo sustancialmente distinto a partir del 24 de marzo; que las organizaciones guerrilleras estaban formadas por jóvenes idealistas sin ninguna responsabilidad en la escalada de violencia ni en el propio golpe de Estado; que la guerra de Malvinas se desató como resultado de la resistencia social creciente contra el régimen, etc.

Hoy, que esas verdades selladas están debilitadas, por el cansancio social con los proyectos políticos que las promovieron y buscaron imponer desde el Estado como “obligatorias”, y por la abundancia de evidencia incontestable en su contra, el estudio riguroso del período puede contribuir a que no sean simplemente sustituidas por sus contrararas ideológicas, sino por una comprensión más aguda, razonable y productiva de la complejidad de lo sucedido en esos años y de sus legados.

El libro de Bonvecchi y Simison contribuye notablemente a ello gracias a que combina una escritura y desarrollo muy llanos e ilustrativos,

que lo vuelven de fácil acceso para el lector no especializado, y un trabajo de investigación riguroso y original, que le saca jugo a las fuentes documentales ahora disponibles sobre el período.

2. Discusión de los principales aportes del libro

Los temas centrales que trata el libro, sus principales aportes, nacen de esas fuentes y su análisis y pueden resumirse en tres puntos: ofrece una imagen muy precisa del funcionamiento en la práctica de los mecanismos institucionales que el régimen se dio para ejercer y controlar el poder gubernamental y la fuerza militar; analiza cómo esas reglas fueron utilizadas por las facciones internas que pujaron por orientar el régimen, para imponerse condiciones y bloqueos unas a otras; y explica cómo esas reglas y estas facciones en pugna le confirieron a actores civiles diversos oportunidades para influir en las decisiones, en una dinámica que puede describirse como un complejo y cambiante equilibrio entre los extremos que postulan dos tesis en pugna en la literatura, la de la instrumentalidad —que los militares fueron ejecutores de intereses ajenos— y la de la autonomía —que habrían logrado aislarse mayormente de influencias externas—.

Hay dos objeciones que pueden plantearse, de todos modos, al análisis de los autores sobre estos temas y principalmente sobre el segundo de ellos. En primer lugar, el trabajo no destaca lo suficiente la carencia de liderazgos fuertes y duraderos en las fuerzas, que distingue a esta experiencia autoritaria de todas las demás del período (incluidas las tres con las que el libro la compara, las de Pinochet y Franco y la brasileña de 1964 a 1985), y está en el origen de la debilidad de las facciones en que se dividieron los militares del Proceso y de la crónica dificultad para componer coaliciones ganadoras entre ellas, para darle mínima consistencia a las políticas que él instrumentó. En segundo lugar, la funcionalidad de las reglas de juego con relación al principal problema que el régimen debió resolver en ese contexto de debilidad de los liderazgos e inestabilidad de las facciones: evitar que las disputas internas escalaran hasta producir un enfrentamiento abierto entre los grupos en pugna, en ausencia de objetivos compartidos más allá de la “guerra antisubversiva”.

Estos dos problemas no afectan, sin embargo, sino que ponen aún más de relieve el aporte principal del trabajo de Bonvecchi y Simison sobre el papel decisivo de las reglas de distribución y control del poder: fue precisamente por esos motivos —la carencia de líderes, la debilidad

e inestabilidad de las facciones y el temor a una confrontación interna abierta y destructiva, no por la fuerza de esas facciones, ni siquiera centralmente por la profundidad de las diferencias programáticas entre ellas—, que el régimen se abrazó hasta el final a los mecanismos que se había dado para conservar una mínima cohesión y perdurar en el tiempo frente a sus enemigos. De allí, por último, que el Proceso tuviera muy difícil gobernar, pero estuviera al mismo tiempo inclinado de principio a fin a hacer la guerra, tanto a enemigos domésticos como externos, dado que solo en ella encontraría la cohesión que le faltaba. En la medida en que encontrara enemigos disponibles para practicarla, podría sobrevivir.

Como dijimos, en el análisis de las reglas institucionales y de cómo ellas operaron para la toma de decisiones, los aportes del libro son particularmente sólidos y novedosos, en especial, en cuanto al análisis de los mecanismos usados para legislar.

La Junta Militar adoptó, además de mandatos fijos y acotados para el ejercicio de la Presidencia y de la propia comandancia de las fuerzas, por un lado, un sistema desdoblado de toma de decisiones que establecía la unanimidad para elegir al jefe de gobierno y resolver las cuestiones consideradas “fundamentales” y, por otro lado, un mecanismo para formar consensos internos en las fuerzas, sobre ascensos, promociones (tema sobre el que el libro tal vez podría haber abundado un poco más, por su enorme importancia para la dinámica del poder interno) y también sobre cuestiones de gobierno, que le daba autonomía a los mandos de cada una de ellas y un carácter deliberativo, en ocasiones cuasi asambleario, a la búsqueda de acuerdos entre los oficiales al respecto. Esto último afectaría seriamente cadenas de mando ya desde el principio poco firmes y confiables.

A todo eso sumó la división del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Al frente de este último se colocó la propia Junta, aunque con la intervención “técnica” de un órgano más amplio, la ya mencionada CAL, compuesta por oficiales activos y retirados de las tres fuerzas, más una considerable dotación de civiles “expertos”. Esta presencia, que fue en cambio mucho menor en los cargos ejecutivos, nacionales y provinciales, donde primó la militarización, permitiría en la CAL un ejercicio muy activo y diversificado del *lobby*.

La CAL se convertiría, explican los autores, en una instancia de trabadas negociaciones y bloqueos mutuos que afectaría la marcha de la gestión, sobre todo en los llamados “asuntos fundamentales”, entre los que se incluyó a casi todos los económicos y los atinentes a los planes políticos e institucionales del régimen.

Bonvecchi y Simison encuentran, además, que los militares procesistas respetaron consistentemente estas reglas, incluso cuando tuvieron que tomar decisiones en medio de fuertes crisis, como sucedió al desplazar a Viola de la presidencia en 1981, invadir las Malvinas en 1982, o convocar a elecciones después de la derrota en la guerra del Atlántico Sur, en 1983. Desmintiendo una premisa que guiara casi todos los trabajos previos —incluido en alguna medida el que lleváramos adelante junto a Vicente Palermo a fines de los años noventa, que resultó en el libro *La dictadura militar, 1976-1983* (2003)—, según la cual el régimen habría sido mayormente caótico, para nada metódico, en el manejo de la legislación y las normas, y eso habría sido funcional con su extremismo ideológico y los disensos programáticos entre sus facciones internas.

Los autores prueban, así, que los resultados decepcionantes de las políticas de esta dictadura no pueden atribuirse a un supuesto “desorden normativo” o a la anomia facciosa que lo habría dominado: hay que buscarlos en otras razones. Entre ellas, se destaca la profundidad de las diferencias entre los grupos en pugna.

Sin embargo, a través de la comparación con otros regímenes autoritarios contemporáneos al Proceso, es posible ver que las diferencias ideológicas y programáticas profundas fueron comunes a todos ellos. Lo que diferencia a este caso no fue eso, sino que en él no hubo facciones cohesionadas y capaces de formar coaliciones ganadoras estables, con liderazgos duraderos y relativamente incuestionados, sino que primó la inestabilidad en todos esos aspectos.

La diferencia es notable con el franquismo y el pinochetismo, como sus mismas denominaciones indican: regímenes donde caudillos autocráticos mantuvieron la cohesión de principio a fin. Pero también lo es con la dictadura brasileña nacida del golpe de 1964, en la que también hubo sucesiones presidenciales disputadas y facciones muy heterogéneas en pugna por esas y otras decisiones, pero las propias fuerzas, principalmente el ejército, contaron siempre con jefaturas fuertes, consolidadas y relativamente prolongadas.

No sucedió lo mismo con los jefes militares del Proceso argentino, ni con sus facciones. Ninguna de las cuatro facciones que identifican los autores: los duros, los politicistas (participacionistas o blandos), los neoliberales y los desarrollistas, puede decirse que perduró durante todo el período. La neoliberal, la única que tuvo un líder indiscutido en los primeros tiempos, el propio general Jorge R. Videla, presidente hasta 1981, prácticamente se disolvió como tal a raíz de la crisis desatada ese año. Mientras que los duros, sin duda el sector con más poder militar,

nunca llegó a tener un líder definido: no pudo serlo, contra lo que señalan Bonvecchi y Simison, el general Luciano B. Menéndez, jefe del tercer cuerpo en los primeros tiempos, porque estaba enfrentado a otros duros, entre ellos Emilio E. Massera, jefe de la Armada, y Carlos G. Suárez Mason, jefe del primer cuerpo de ejército; ni tampoco cumplió esa función este último, pues estuvo subordinado a Videla y al general Albano E. Harguindeguy, ministro del Interior, quienes permanentemente bascularon entre duros y blandos. Mientras que entre estos últimos la situación fue aún más confusa, porque primero aspiraron a que Videla los liderara, sin éxito, luego se decantaron por Roberto E. Viola, a quien lograron convertir en presidente en 1981, pero desde que éste fracasó en la contención de la crisis económica y fue desplazado de la presidencia, ya a fines de ese mismo año, el grupo se dispersó. La misma suerte corrieron tiempo antes los desarrollistas, cuando quien aspiró a liderarlos, el general Ramón G. Díaz Bessone, fuera rápidamente desplazado del gabinete de Videla.

Sucedió también, y por sobre todo, que los alineamientos de muchos altos oficiales con esas cuatro facciones fueron inestables y se entrecruzaron según cuáles fueran los asuntos decisivos en disputa en cada momento. Los blandos y dialoguistas estaban divididos respecto al programa neoliberal: mientras Harguindeguy lo apoyaba, Viola lo rechazaba, y por eso no podían ponerse de acuerdo sobre con qué civiles dialogar y para qué. Algo similar sucedía con Massera y con Leopoldo F. Galtieri, jefe del segundo cuerpo de ejército hasta 1981, que fueron dialoguistas o duros según el momento que se considere y los interlocutores y asuntos de que se tratara. Este último llega a la comandancia del Ejército aliado a Viola y se convierte en presidente como fruto de la alianza circunstancial entre duros y lo que queda de los neoliberales, y luego pretende gobernar con un mix de todo eso más los dialoguistas y desarrollistas residuales — mixtura que también puede encontrarse en la última etapa, encabezada por el general Reynaldo Bignone—. En suma, si las facciones no pudieron sellar alianzas y crear coaliciones duraderas mayoritarias fue porque tampoco ellas eran estables ni contaban con líderes definidos, casi nunca tuvieron claro qué priorizar ni cómo conseguirlo. En particular, esto se observa en dos cuestiones fundamentales para el éxito del régimen: las políticas económicas y la organización de apoyos civiles.

Los autores tratan de resolver la cuestión de los alineamientos cruzados e inestables considerando como “casos anómalos” los de jefes militares que cambiaron permanentemente de posición sobre temas importantes, como los recién mencionados. Ubican en esa categoría en particular

a Massera y Harguindeguy, a quienes postulan incluso como cabezas de dos facciones específicas. Pero no parece ser una decisión suficientemente fundada, ni coherente con el argumento general del trabajo.

En el origen de estos problemas subyace un hecho en cierta medida subestimado: que cada una de las fuerzas estaba profundamente dividida y, a medida que pasó el tiempo, se descompusieron más y más las cadenas de mando en ellas. De allí que todas las jefaturas estuvieran condicionadas: la negociación interna de apoyos supuso intercambios constantes entre jefes y oficiales con mando de tropas y las lealtades conseguidas de esa manera resultaron lógicamente bastante oportunistas y efímeras. Por lo mismo, la sucesión en las comandancias supuso marcados giros políticos y masivos cambios de bando —le sucedió a Videla, a Viola, también a Massera y obviamente a Galtieri—. Y cuando Galtieri logró volver a cohesionar al régimen con el recurso a una guerra externa, no lo hizo en nombre de los duros, ni de los blandos. La guerra prolongó momentáneamente el horizonte temporal del régimen, como querían aquellos, pero creó al mismo tiempo oportunidades inéditas para lo que los blandos buscaban: incrementar la participación de los civiles. Algo parecido sucedió con los dispersos neoliberales y desarrollistas: aquellos volvieron a poner un ministro de economía de su simpatía a fines de 1981, pero para aplicar políticas como la suspensión del pago de la deuda, la ampliación del déficit fiscal, el privilegio de los aliados en el tercer mundo y el bloque soviético, y la dilación hasta nuevo aviso de cualquier reforma del Estado o las empresas públicas —en otras palabras, todo lo que entusiasma a los desarrollistas—.

3. Dos problemas entrelazados: la guerra como razón de ser del Proceso y una deformada gobernabilidad económica

En suma, las facciones del PRN no tuvieron ninguno de los rasgos que los autores reseñados le atribuyen: no tuvieron liderazgos estables y sólidos, ni cohesión programática, ni fueron los protagonistas de los principales conflictos ni de las decisiones más fundamentales del régimen, porque frente a aquellos y estas tendieron a dividirse. De allí que no pueda decirse que alguna de las facciones haya conservado su identidad, sus bases y orientación hasta el final del período. Todo lo cual supone una diferencia fundamental con los demás regímenes autoritarios de aquellos años. Asimismo, esto explica, junto a la profundidad de los disensos y aún por encima de ellos o en ausencia de disensos tan mar-

cados, que los conflictos internos fueran en este caso más recurrentes y destructivos que en experiencias autoritarias comparables. Porque, insistimos, de su interacción no resultaron, no podían resultar, consistentes coaliciones ganadoras casi sobre ningún asunto.

Curiosamente, como hemos adelantado, en el único terreno en que esas dificultades se pudieron superar fue en la decisión siempre más difícil: hacer la guerra. La lucha antiliberal, como se sabe, fue la que mantuvo unido al régimen durante los primeros tiempos. Cuando ella tendió a desactivarse —por la extinción de toda resistencia armada y la conclusión del trabajo sucio de eliminación de las izquierdas revolucionarias y las disidencias en general—, los militares buscaron recobrar la cohesión haciéndole la guerra a Chile por el conflicto sobre el canal de Beagle y las islas linderas. Ese fue, curiosamente, el único momento en que el todavía presidente Videla optó por violar las reglas internas, recurriendo a actores externos, el Vaticano y Estados Unidos, para detener una decisión que se había consensuado en la Junta y los altos mandos y que algunas unidades militares estaban ya ejecutando. Pero los militares tendrían de nuevo su oportunidad, y ya nadie lograría detenerlos, en abril de 1982.

Esto nos conecta con otro tema muy interesante considerado en el libro: la autonomía militar y las influencias civiles. El estudio es sumamente detallado y preciso, de nuevo, en particular sobre el rol de la CAL al respecto, y echa luz sobre otro aspecto que no se conocía ni se podía entender bien hasta ahora que se conocen las actas y expedientes de ese organismo: cómo funcionó el *lobby*, en particular el *lobby* empresario, mirando principalmente las pretensiones de los sectores reformistas, estos, de los neoliberales.

La dictadura no actuó aislada de la influencia civil, concluyen los autores, ni actuó tampoco consistentemente como instrumento de un delimitado actor económico. Un punto muy importante para desmitificar las relaciones entre gran capital y dictadura reside en que la dictadura mantuvo relaciones complejas, en muchos aspectos conflictivas, con los actores que quería beneficiar y también con muchos otros que no tenía claramente decidido si beneficiar o perjudicar. Bonvecchi y Simison explican muy bien esos conflictos y ambigüedades.

Aunque también surgen algunos problemas al respecto: la autonomía militar tuvo un rol igualmente importante. Hay que explicar cómo y por qué en algunas cuestiones en que se logró autonomizar el *lobby*, el grupo gobernante (de militares y tecnócratas) extremara su indiferencia a las presiones sectoriales.

Esa autonomía fue una prioridad para el régimen por al menos dos razones que merecen ser mejor consideradas: la experiencia fallida previa (durante la Revolución Argentina) de poner a grandes empresarios a manejar la economía, que no quería repetirse, por lo cual se comprometió a los funcionarios civiles de Economía con el “programa militar” y se los sometió a la supervisión constante de la oficialidad; y el “error” de haber confiado entonces demasiado en un solo jefe militar, por lo cual la división del poder interno tenía ahora por meta evitar que esa supervisión castrense fuera sesgada, controlada por un solo grupo interno, y a través suyo, por intereses o visiones de nuevo particulares. El juego de facciones debía servir, entonces, para componer un “interés general” por el que las fuerzas en conjunto velarían.

Lo interesante del caso es que ese interés general nunca pudo componerse pues faltó un centro político capaz de hacer el trabajo. Solo hubo facciones, o incluso menos que eso, grupos de presión efímeros e inconsistentes en pugna entre sí. Estos grupos dieron más oportunidades de influir, inevitable y paradójicamente, a los intereses particulares (*lobbies*) que en principio se pretendía domeñar. Con lo que se terminarían bloqueando las chances que pudo tener el equipo económico de concebir, con un uso equilibrado de su autonomía, un programa más consistente y “general”. Se dio entonces la particularidad de que mientras los militares decían, y tal vez pensaban, estar frenando a Martínez de Hoz para que no actuara como un empresario con intereses particulares y de grupo, en verdad en lo que lo frenaron fue en lo que más hizo o pretendió hacer por ajustarse al objetivo general del régimen, reorganizar la economía sobre bases capitalistas estables.

Paradoja que merece una reflexión mayor y ofrece una ilustración más precisa sobre el problema de las facciones: ¿qué eran esas facciones que frenaron a los neoliberales de Martínez de Hoz, no de promover negocios particulares, cosa que este hizo, y con mucho entusiasmo, sino en su intento de darle consistencia y continuidad a una política de estabilización y apertura? ¿Encarnaban realmente visiones más “desarrollistas” o en esencia eran grupos de interés puntuales e inestables que utilizaron esa y otras excusas ideológicas cuando les convino a sus reales y muy específicos objetivos?

El punto es importante porque explica tal vez la principal razón por la que Martínez de Hoz no logró ajustar el gasto público, ni desregular industrias de peso, ni darle bases sólidas al sistema financiero, ni eliminar o siquiera acotar regímenes especiales que beneficiaban a sectores de actividad muy poderosos. Por lo cual su recurso a la apertura y el retraso

cambiarlo para combatir a la vez la inflación y la economía asistida se volvió más intenso y exigente, y se aseguró que en esa cuestión las presiones de los afectados no lo limitaran.

4. Comentarios finales: la institucionalidad de una dictadura sin dictadores y el fin de la corporación militar

Para terminar, las reglas del Proceso sobrevivieron a sus facciones, a sus programas de gobierno y a los sueños que abrazaron sus protagonistas. El libro de Bonvecchi y Simison ofrece nueva evidencia para entender por qué fue así: sin líderes fuertes, sin mínima cohesión programática más allá de la que necesitaban para hacer la guerra, sin siquiera cadenas de mando firmes en cada una de las fuerzas, los militares se dieron unas pautas para funcionar institucionalmente que les permitirían evitar que los conflictos entre ellos se extremaran, aunque también les dificultaron enormemente tomar decisiones de gobierno para administrar la paz. En eso fue probablemente en lo único en que los militares procesistas tuvieron éxito: mantener hasta el final la “institucionalidad” de una dictadura sin dictadores.

Los autores lo dejan de manifiesto:

En política institucional, las facciones utilizaron las reglas de decisión en la Junta y en la CAL para bloquear y revertir las iniciativas de duros, neoliberales y politicistas en torno de la apertura política y del manejo de las secuelas de la represión, de manera semejante a lo ocurrido entre el Ejército y las demás Fuerzas Armadas en la Junta chilena, y entre los políticos civiles y los militares en el Congreso brasilero, pero con una recurrencia e intensidad tales que, a diferencia de lo ocurrido en los otros casos, impidieron a todas las facciones imponer rumbo alguno. (2026, p. 126)

Lo que hemos tratado de mostrar aquí es que eso no se debió solo a que las disidencias mismas fueron más recurrentes e intensas que en los otros casos, sino a la peculiar conformación de las propias Fuerzas Armadas argentinas como actor político y de gobierno, y el efecto que eso había tenido sobre su estructura militar, es decir, el debilitamiento de sus cadenas de mando. La falta de líderes, el entrecruzamiento oportunista y la debilidad general de las facciones internas fue parte esencial de esos problemas.

Todo lo cual apunta a otra conclusión importante: la marcada desproporción entre las ambiciones de estos actores militares y sus posibilidades reales de actuar. De otro modo es difícil entender la creencia que animó a cada uno de los ocasionales jefes castrenses de aquellos años y a sus grupos de referencia: que debían esperar su oportunidad para adueñarse por completo de la escena, así que les convenía actuar mientras tanto con un alto grado de libertad, no cooperar con los demás, o acordar solo puntualmente y a la espera de poder olvidar sus compromisos, para salirse con la suya en cuanto la ocasión se les presentara. Algo muy propio de la política argentina no solo de esos años, sino de las últimas décadas, educada largamente en la administración de la inestabilidad más extrema y que permite entender también por qué las reglas establecidas en el Proceso, no tan distintas a las abrazadas por otros regímenes autoritarios (finalmente los militares argentinos las habían copiado de sus pares chilenos y brasileños), dieron aquí resultados diametralmente diferentes.

El libro tiene otro gran mérito en relación a este punto: no explica la época del Proceso como una excepcionalidad o una anomalía total, sino como algo bastante acorde a nuestra forma de hacer las cosas, aunque con unas metas, en una época y frente a desafíos sí excepcionales. Permite entender mejor los resultados catastróficos que tuvo para el país y para los propios militares: su necesidad de hacer la guerra, incluso de la forma más irracional, con tal de mantener en pie al régimen, lo llevaría a hacer cosas que ninguna otra dictadura de la época siquiera imaginó. Esto es válido tanto para la “guerra sucia” como para la “guerra limpia” (en Malvinas), ambas ligadas íntimamente entre sí, como mostrara ya León Rozitchner en su clásico estudio sobre el tema (*De la guerra sucia a la guerra limpia*, CEAL, 1985).

Los militares del Proceso entendieron ciertamente, a su manera, el problema en que estaban. Por eso se dieron la mencionada institucionalidad y se abrazaron a ella, para evitar que los conflictos intestinos los devoraran. Solo que al hacerlo no pudieron evitar que las decisiones en que esas reglas desembocaran dieran finalmente ese mismo resultado y de la peor forma imaginable.

Al final del capítulo 6 del libro de Bonvecchi y Simison se dice: “En ello (el sistema de distribución del poder) se cifró el fracaso de su régimen en consolidar tanto las orientaciones de política pública que ensayó como la tutela de las Fuerzas Armadas sobre el sistema político que procuró instaurar” (2026, p. 107). Pero un párrafo antes también se señala que “las facciones utilizaron esas reglas para hacer valer sus preferencias”

(p. 107) y sugiere por ello que el consistente respeto de las reglas, aun cuando se las usara para destituir presidentes, “evitó que las diferencias se dirimieran por la violencia” (p. 107). Esto último es lo más importante: la dictadura logró ejercer la violencia sobre otros actores, de formas extremas y a menudo insostenibles e injustificables, pero también evitar que esa violencia se practicara entre ellas, y que los fracasos acumulados de sus políticas redundara en una crisis del régimen: éste se sostendría hasta el final, como el “gobierno institucional de las Fuerzas Armadas”, incluso cuando esa estructura militar se derrumbaba.

Un paradójico triunfo de la institucionalidad en un país de precarias instituciones. Las reglas, se suele decir, no rigen en Argentina, vivimos en una total anomia. Muchos han tendido a pensar, incluido el propio fundador de esa terminología, Carlos Nino (1997), que la última dictadura tiene un papel importante en el origen, o al menos el agravamiento, de ese problema. Pero es curioso que si así fue, no sucedió solo porque ella violó las leyes y la Constitución sistemáticamente, sino también por haber creado un orden institucional capaz de sobrevivir a todas las tormentas imaginables.

Tan es así, que el régimen en verdad no colapsó, funcionó de acuerdo a sus reglas hasta el final y buscó imponer condiciones a la transición, y algunas consiguió, en materia de manejo de la economía, de los sindicatos, del sistema electoral, etc., usando sus reglas de funcionamiento. Si no lo logró con la amnistía fue porque las urnas sellaron el colapso del poder militar, no porque el régimen no lo intentara.

Ese fue el fin de la corporación militar. Esto nos enseña tal vez algo importante, generalizable, sobre nuestras corporaciones: su tendencia a morir muy lentamente, abrazadas hasta las últimas consecuencias a sus reglas, cuando ya sus energías, su legitimidad y su propia razón de ser hace tiempo se han extinguido.

Referencias bibliográficas

- Bonvecchi, Alejandro y Emilia Simison (2026). *¿Cómo gobernó la dictadura?* Edhasa.
- Nino, Carlos (1997). *Juicio al mal absoluto*. Emecé.
- Novaro, Marcos y Vicente Palermo (2003). *La dictadura militar 1976-1983*. Paidós.
- Rozitchner, León (1985). *De la guerra sucia a la guerra limpia*. CEAL.